

Las ciudades perdidas aparecen

Armando Cisneros

En nuestros días la conflictualidad urbana es registrada por una parte importante de la prensa mexicana. A diferencia de lo que ha sucedido en otras épocas, ahora podemos informarnos continuamente de un gran número de eventos sociales tradicionalmente desatendidos. Encontramos panorámicas múltiples que nos dan otra visión de la ciudad y de los agentes que actúan en ella. Aparecen análisis y notas sobre políticas urbanas, informes sobre gestiones entre autoridades y gobernadores, demandas de pobladores, conformación de organizaciones sociales, denuncias de prácticas especulativas y muchas otras situaciones que antes sólo se abordaban de manera lateral o coyuntural. Muchos datos sobre los llamados movimientos sociales urbanos forman parte de esta ola de conocimientos con que ahora se cuenta, abriendo la posibilidad de explicar su desarrollo a la luz de estudios más completos y detenidos. Los efectos sociales que ha tenido esta riqueza informativa aún son difíciles de determinar pero seguramente están desencadenando diversos cambios.

Junto con la actualización informativa de la prensa la misma historia de las movilizaciones urbanas ha producido nuevas perspectivas políticas. Entre los cambios al respecto pueden anotarse los que se han dado en la gestión urbana. En términos generales ahora existe un consenso respecto al nuevo lugar del PRI frente a los movimientos urbanos. Puede afirmarse que dejó su antigua hegemonía para compartir su actividad política con otros partidos y con organizaciones independientes, fundamentalmente de izquierda. La incapacidad del partido oficial para plantear alternativas reales a una crisis urbana cada vez más aguda y a sectores sociales cada vez menos gobernables ha provocado una ruptura en el modelo tradicional y ha dado paso a nuevos conflictos de clases, potencialmente transformadores. Si durante mucho tiempo fue

relativamente cómodo y barato para el estado el control de las reivindicaciones de las colonias populares, hoy las dimensiones del problema urbano y el tipo de respuestas sociales hacen más cara y difícil toda gestión estatal.

Un proyecto de control sustituto, que nos parece mucho más perecedero, lo ha constituido el Partido Socialista de los Trabajadores, nacido en 1973 con la intención de arraigarse ampliamente entre campesinos y colonos a partir de tomas de tierras. Sin embargo la coyuntura echeverrista que facilitó su inicial crecimiento, no se mantuvo igual en el sexenio siguiente y su avance fue frenado estrepitosamente. Al mismo tiempo se devaluaron muchos de los mecanismos políticos utilizados por ese partido. Ocupaciones de tierras espontaneístas que se tradujeron en automáticos desalojos, caudillismos antidemocráticos, subordinados de reivindicaciones locales a proyectos de partido, fueron obstáculos para que el PST se convirtiera en cabal heredero de la clientela oficial en los barrios populares.

La insuficiencia del PRI, del PST y del mismo gobierno para cooptar toda la vertiginosa conflictualidad urbana dio como resultado la existencia de un espacio político nuevo. Ese espacio ha crecido en los últimos años y hoy ha sido ocupado en su mayor parte por la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, organización joven que nace en 1980, pero que tiene sus raíces en luchas que abarcan más de una década.

Los orígenes inmediatos

Los esfuerzos para superar el carácter localista de las reivindicaciones urbanas han existido ya desde hace algunos años. Los primeros pasos se dan al interior de una misma ciudad o entidad, coordinando la lucha de varias colonias y ligándola con movimientos emprendidos por es-

tudiantes, obreros y campesinos. Importantes ejemplos surgieron en provincia a principios de la década pasada. En la ciudad de Chihuahua los colonos fueron el principal motor del Comité de Defensa Popular, que aglutinaba a diferentes grupos sociales. En Monterrey se formó el Frente Popular Tierra y Libertad con la participación de más de 20 colonias de poseionarios. En la ciudad de México surge en 1976 el Bloque Urbano de Colonias Populares, bajo iniciativa y dirección del Campamento 2 de Octubre de Iztacalco. Esta organización desaparece cuando su principal promotor se desintegra políticamente, dejando en su lugar a un Frente Nacional 2 de Octubre, de muy incipiente actividad hacia 1980. Otra experiencia interesante fue el Frente Popular Independiente, formado a principios de los años setenta por diversos sectores. Según un documento de la organización, estaba integrado por "organizaciones democráticas de campesinos, de sindicatos de obreros, de asociaciones de colonos, de comités estudiantiles, de grupos de maestros y pequeños comerciantes". Algunos grupos se desarrollan activamente en la periferia de la ciudad de México y participan en luchas por la regularización de la tenencia y los costos del transporte urbano, entre otras. En 1979 el proyecto parece agotado y se desintegra, dando lugar a la formación de la Unión de Colonias Populares del Valle de México, A.C. La nueva organización se da a la tarea de superar las limitaciones de su antecesor y procura superar las acciones espontáneas y localistas. Sin abandonar las reivindicaciones de los barrios busca alternativas globales y pronto cuenta con comités de base en una decena de colonias. Pensada para desembocar en proyectos más amplios, la UCP decide participar en 1981 en el Movimiento Revolucionario del Pueblo, organización aliada con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Unidad de Lucha Revolucionaria en la lucha electoral de 1982.

La Conamup

La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular nace con el carácter de provisional en mayo de 1980. Es ese un momento de auge económico del país que tiene un impacto trascendente en las políticas estatales y en las movilizaciones urbanas. La explosiva riqueza que permitieron las divisas petroleras al estado mexicano hizo posible la construcción de grandes obras en diversas ciudades del país. Se levantaron nuevos edificios públicos, se revitalizaron centros históricos y se ensanchó y alargó la vialidad. La reutilización del espacio se tradujo en desalojos y los movimientos de resistencia se multiplicaron sin que el PRI fuera capaz de cooptarlos de inmediato. El control de la problemática vino a menudo por el lado económico, gracias a la solvencia estatal, que permitió indemnizaciones y reubicaciones en muchos casos. Lo interesante fue que la política urbana del estado generó movimientos que se han venido consolidando.

En el plano estrictamente político también se favoreció el nacimiento de la Conamup. La Reforma Política, con todas sus limitaciones, generó efectos que trascendieron las acciones parlamentarias y se manifestaron en el resto de la sociedad, particularmente en las ciudades. Los nuevos resquicios políticos permitieron así la evolución de fuerzas políticas latentes. Se producen entonces organizaciones de campesinos, maestros y colonos que se apropian de espacios políticos y generan sus mecanismos de presión. Es claro que estas acotaciones no significan la total dependencia del movimiento urbano a factores de orden económico y político de naturaleza externa, es obvio que existe una voluntad política interna pero conviene señalar las condiciones globales.

El hecho histórico se produce en Monterrey. Por primera vez un grupo formado por las más importantes organizaciones de colonos que se mantienen al margen del control oficial decide unirse. Puede lanzarse la hipótesis de que la voluntad de reunión se asocia entonces con la necesidad que tienen los movimientos de solidaridad política. Esto es particularmente notorio para los colonos del Frente Popular Tierra y Libertad, anfitriones del encuentro. Habiendo ganado un reconocido prestigio y una fuerza local, los colonos ven en el nuevo gobernador estatal, Alfonso Martínez Domínguez, una verdadera amenaza política. No era descabellada toda precaución ya que Martínez Domínguez, gobernador de Nuevo León desde 1979, había sido regente del Distrito Federal y había dejado tras de sí responsabilidades nunca aclaradas en torno a los sangrientos sucesos del 10 de junio de 1971. Además contaba con una sólida experiencia en el manejo de grupos populares desde 1943. Se había iniciado como secretario general del Sindicato de Trabajadores del DDF, después fue dirigente de empleados y maestros federales, posteriormente llegó a secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y diputado en dos ocasiones. Fue organizador del PRI del D.F. durante la campaña de Adolfo López Mateos, director del ISSSTE, secretario general de la CNOP, representante del PRI en la Comisión Federal Electoral, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y jefe de la campaña presidencial de Luis Echeverría. Un personaje de este tipo, capaz de organizar movilizaciones políticas o acciones de fuerza resultó notoriamente incómodo para los colonos de Monterrey, que pronto recibieron el primer aviso con el Plan de Tierra Propia, implementado para debilitar la fuerza del frente Tierra y Libertad.

Por el área metropolitana de la ciudad de México participaron en el primer encuentro los colonos de San Miguel Teotongo, la Unión de Solicitantes y Colonos de la Vivienda (USCOVI) y la Unión de Colonias Populares. Todos ellos enfrentaban también una agresiva política estatal sintetizada en la ley del *bulldozer*. Una de las etapas más conocidas es la de los ejes viales, de los cuales se inauguró una primera parte poco antes de las elecciones de 1979. La realización de las obras no tuvo, sin embargo, efectos significativos en el desarrollo de los sufragios. Contra lo que algunos pensaron, el derrumbe de casas y los desalojos no provocaron una amplia protesta popular. Sí hubo protestas de sectores medios que defendían árboles y de propietarios pequeños y medianos que exigían justas indemnizaciones pero salvo los casos de Tepito y Guerrero no hubo oposición popular. Esto puede explicarse porque el reacomodo de habitantes de vecindad en lotes que eventualmente serían propios y las indemnizaciones económicas, importantes para la economía de una familia obrera, fueron bienvenidos por mucha gente. Es evidente que la nueva vialidad resultó extremadamente cara para la administración pero sólo así pudo evitarse una fuerte oposición a los métodos autoritarios.

Otro participante del primer encuentro fue el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco, la organización más joven y la que enfrentó el más importante proyecto de desalojo. Cerca de 25 mil familias de las partes altas de la bahía de Acapulco, el Anfiteatro, serían reubicadas por el gobierno estatal bajo el pretexto de que contaminaban el mar. Tras de la imagen ecologista estaba una clara intención de reutilizar y revalorizar el espacio turístico del puerto. Una parte de los cerros fue convertida en parque nacional y los colonos suponían que todo iba a servir de asiento a modernos hoteles, tal y como en décadas anteriores había sucedido con las playas.

El embate del entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, apoyado por el gobierno federal, se inició en los primeros meses de 1980 y pronto fracturó los mecanismos de control político que habían operado en la zona. Los cálculos oficiales confiaban en que el PRI o el PST serían capaces de manejar el desalojo pero el proyecto y su implementación se estrellaron contra una fuerte oposición local que dio origen al Consejo General de Colonias Populares de Acapulco. El PRI había sido el gestor en la ocupación de muchas de las colonias de los cerros pero pronto fracasó porque cargaba con muchas promesas incumplidas, especialmente las de la regularización del suelo, y porque se le identificó de inmediato con el gobierno. El sustituto natural parecía ser el PST, por su lenguaje radical de izquierda y porque gozaba de arraigo en el área gracias a que algunos exguerrilleros estaban incorporados a sus filas. Sin embargo, su voz perdió toda legitimidad cuando propuso el desalojo del Anfiteatro como única alternativa.

La oposición al desalojo, ya experimentada en algunas colonias de Acapulco décadas atrás, basaba su fuerza en el trabajo acumulado por la participación colectiva. El Anfiteatro había sido construido durante años por el esfuerzo personal de por lo menos una generación, con casi ningún apoyo de la administración local. La mayor parte de los servicios que se tenían eran producto del trabajo de muchas familias. Además estaban cerca de las fuentes de empleo, a unos pasos de las playas y hoteles. Era difícil obligarlos a salir de las casas que ellos mismos habían levantado, sin indemnizaciones y alejándolos de los empleos, ubicándolos en la que el gobierno llamó ciudad Renacimiento, localizada en una región inhóspita y pantanosa. Pero las acciones del estado tuvieron sus efectos y mucha gente bajó de los cerros, algunos convencidos de que la única manera de legalizar una propiedad era aceptando la reubicación en un área que el gobierno empe-

zaba a equipar y construir. Otros lo hicieron temerosos de la violencia que desató el gobernador de la entidad y que amenazaba con recrudecerse. Sin embargo, el tiempo jugó a favor de los colonos y Rubén Figueroa abandonó el poder en 1981, cuando alrededor del 50 por ciento de los colonos aún resistían en el Anfiteatro. El movimiento quedó consolidado y el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco realizó, después de nuevas movilizaciones, un convenio con el gobernador entrante, Cervantes Delgado, por el que no serían desalojados y se aceptarían sus formas de gestión. Más que el final, todo parecía que se trataba del inicio de una lucha, nacida de un gran proyecto estatal de corte autoritario y enfrentada ahora con los problemas de la gestión urbana desde una óptica diferente, en donde resalta su participación en la Conamup.

Los ejemplos de Monterrey, ciudad de México y Acapulco nos sirven para entender la evolución de la Conamup a partir del primer encuentro. Aún sin una organización bien definida, todo se decide en asambleas y en comisiones sectoriales, sin un proyecto político claro y sin planteamientos alternativos ante la política urbana en su conjunto, la Conamup crece aceleradamente. Pactos y alianzas entre organizaciones de colonos son suficientes para aglutinar una buena parte del gran descontento que genera la política oficial en las ciudades.

Los colonos en Durango

Las continuas acciones de defensa interna, la solidaridad con otros movimientos y el avance en la politización de muchos grupos de colonos desembocaron en el segundo encuentro, realizado en la ciudad de Durango en el mes de abril de 1981. Participaron entonces cerca de 2 mil delegados de 102 organizaciones, la mayor parte de ellas de colonos, aunque también hubo represen-

tantes de partidos políticos e instituciones universitarias.

Fue el encuentro en que se hicieron más patentes las diversidades internas ya que los mismos grupos convocantes tenían planteamientos opuestos. En las mesas de debates estaban representantes del Consejo General de Colonias Populares de Acapulco que aún tenían poca experiencia política. Una señora de esa organización declaraba: "Nosotros éramos gente de hogar, del pueblo. La misma necesidad nos ha hecho venir hasta acá." Junto a ellos representantes de la Unión de Colonias Populares del Valle de México, la mayoría muy jóvenes pero con planteamientos políticos más precisos. Su participación destacaba por la búsqueda de alternativas comunes y por llevar al debate la cuestión electoral, en la que ya se habían comprometido a formar parte junto con la principal invitada del evento, la candidata del PRT a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra. Como contraste se encontraban los representantes del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey la más obstinada organización antipartido. En la misma línea podía ubicarse a la organización de San Miguel Teotongo y al Frente Independiente de Colonias de Sinaloa. También participó entre los organizadores el Movimiento Popular Independiente de Jalisco pero sólo para no tomar partido en la diversidad. Finalmente figuraba el Consejo de Defensa Popular de Durango, organización anfitriona, creada en 1979 y ubicada por afinidad con el frente de Monterrey.

Los desacuerdos entre las organizaciones participantes fueron continuos y mostraron la múltiple composición ideológica y política de los delegados. El temario a discutir fue tal vez demasiado ambicioso: caracterización del movimiento popular, política urbana del estado, intercambio de experiencias, análisis de la coyuntura y alternativas. La participación de mucha

gente, en un corto tiempo y en una cantidad grande de temas provocó evidentemente conclusiones poco sólidas, pese al enorme esfuerzo que realizaron todos los participantes.

Uno de los puntos de mayor debate fue el de la regularización de la tenencia de la tierra. Muchas organizaciones, entre ellas la UCP, la levantaban como una de sus demandas centrales y planteaban la búsqueda continua de la legitimidad y gestión frente al estado. Por el contrario, una corriente impulsada por el Frente Popular Tierra y Libertad se manifestó en contra de la regularización porque tal medida implicaba el fraccionamiento del movimiento, la ruptura de la solidaridad interna y la integración progresiva en los mecanismos de control del estado. Esta corriente consideraba que toda negociación significaba de cierta forma una contaminación política. En éste como en otros puntos no hubo consenso y las partes decidieron dejar a cada movimiento la libertad de escoger la estrategia a seguir.

El principal debate se concentró, como era de esperarse, alrededor de la Reforma Política, puesto que algunas organizaciones plantearon la necesidad de participar en ella, principalmente junto con el PRT que envió una comisión de alto nivel para discutir la cuestión. La UCP y otras organizaciones planteaban que participar en las elecciones no significaba la disolución del movimiento y sí la acumulación de fuerzas, aceptando que la Cámara de Diputados no era un fin en sí mismo. La otra tendencia, la de la línea de masas, era impulsada por organizaciones como Tierra y Libertad, Teotongo y Comité de Defensa Popular de Durango, y planteaba que la fuerza popular es independiente de la lucha electoral, la que sólo fortalece y legitima al estado. Esta última corriente fue la hegemónica y al interior de la Conamup se decidió que se dejaría a las organizaciones la decisión que se quisiera,

siempre que no se involucra a la Coordinadora en su conjunto. La decisión fue sensata porque de esa manera se mantuvo una mínima consistencia, evitando una prematura disolución.

Un acuerdo unánime fue el deseo de ligarse a otras organizaciones de masas no partidistas, similares a la Conamup, especialmente a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con las cuales realizarían los colonos una marcha multitudinaria por las calles de la ciudad de México varias semanas después del encuentro.

Al finalizar el segundo encuentro de colonos, en el que se le quitó lo provisional a la Conamup, quedó claro que el movimiento popular independiente constituía un espacio disputado por dos líneas políticas, la movimientista y la partidista, en donde cabían diversas cuestiones opuestas, entre ellas las de la legalidad de la gestión, el intento de transformar o no esa legalidad, el camino de los partidos y el camino de las masas.

A manera de conclusiones

La vinculación entre partidos y movimientos urbanos no pudo ser frenada en Durango por las organizaciones que siguen la línea de masas. Pronto se reveló que los partidos requerían de una presencia mayor en la sociedad vía colonias populares y que éstas necesitaban voceros políticos de carácter nacional. A nadie extrañó entonces que el nuevo PSUM y el PRT lanzaran como candidatos a diputados a destacados dirigentes de movimientos urbanos. A pesar de ello la relación aún es distante porque se ha partido de concepciones diferentes: por un lado hay la idea de organizaciones de masas carentes de planteamientos políticos nacionales y por otro concepciones políticas globales sin relación con las reivindicaciones cotidianas. Salvo algunas

excepciones esa parece ser una de las principales limitaciones.

Sin embargo, la lucha entre las dos tendencias principales no ha llegado a una solución definitiva. En Acapulco, durante el II encuentro, la Conamup evitó toda participación de partido, aun cuando muchos de los dirigentes que participaron tenían vínculos en partidos.

En tanto se resuelve la disputa interna por la Conamup cabe señalar algunos elementos que tienen que ver con otros aspectos de la organización. Señálese por principio de cuentas que las negociaciones con la administración son muy débiles, tanto por el autoritarismo de muchos gobernantes como por la ausencia de proyectos urbanos de los colonos que se antepongan a los del estado. Las alternativas que plantean los colonos suelen estar atomizadas por las reivindicaciones de cada barrio y limitadas por la ausencia de proyectos más elaborados. Ese es uno de los pun-

tos en donde se hace urgente la presencia de técnicas mínimas y de asesores capacitados. Para subsanar esta necesidad se ha observado un cierto tránsito de técnicos hacia los movimientos urbanos y seguramente que pronto existirán frutos al respecto.

Otro factor fundamental es el del programa de la organización. La Conamup ha iniciado el debate sobre algunos aspectos urbanos y ha planteado diversas alternativas, pero no tiene un programa elaborado en materia de lucha política concreta. Esta es tal vez una de sus principales debilidades, contrastante con la impresionante fuerza que contiene el movimiento urbano. La dirección de esa fuerza aún no es clara, por más que aceptemos que la izquierda tiene en ella un papel hegemónico. Esa es una de las cosas que habrán de solucionarse si no se quiere que otras corrientes, quizá de la derecha, utilicen la potencialidad de las luchas urbanas.

